

Voces: PRESCRIPCIÓN - MEDIACION

Título: Suspensión de la prescripción por requerimiento de mediación en la provincia de Santa Fe

Autor: Frúgoli, Martín A.

Fecha: 1-feb-2017

Cita: MJ-DOC-7638-AR | MJD7638

Producto: STF

Sumario: SUMARIO: *I. Introducción. II. Comienzo y fin de la suspensión de la prescripción. III. Impedimento del sistema.*

I. INTRODUCCIÓN

Transcribimos el art. 23 de la Ley 13.151, que prescribe lo siguiente:

Art. 23: «A los efectos previstos en el artículo 3986, primer párrafo, del Código Civil, el requerimiento de mediación equivale a interposición de demanda».

»La interrupción de la prescripción operará contra todos los requeridos y, en los términos del artículo 3987 del Código Civil, se tendrá por no sucedida si el requirente no interpone la demanda dentro de los seis -6- meses de la fecha del acta de finalización de la mediación».

Decr. Reglamentario, art. 23: «Se considerará requerimiento de mediación a la solicitud interpuesta en los términos y modos establecidos en el artículo 7 de la Ley 13.151».

Si bien los artículos transcritos en el párrafo anterior continúan intactos, la vigencia actual del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación modifica sustancialmente a los mismos, ya que en su artículo 2542, se resuelven en forma expresa las consecuencias en el régimen de prescripción por el pedido de mediación. Así, la norma indica lo siguiente:

Art. 2542: «Suspensión por pedido de mediación. El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero».

«El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes».

Dado que el Código Civil de Vélez no preveía el supuesto de mediación por no ser ella una herramienta utilizada en la época de su sanción (1), la ley que comentamos había tomado una postura en torno a los efectos del pedido de mediación con relación a la prescripción. Ahora bien, cabe preguntarse entonces lo siguiente: ¿cómo debe ser interpretada esta norma ante la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial?

Creemos que los efectos interruptivos de la prescripción dados por el art. 23 de la Ley 13.151, han sido derogados por el actual art. 2542 del CCivCom. En su lugar, corresponde a partir del 1 de agosto de 2015, otorgarle «efectos suspensivos» al pedido de mediación en lugar de interruptivos. Ello sin perjuicio de la previa, conjunta o posterior inicio de demanda judicial, en cuyo caso operará, desde dicha petición judicial, la interrupción de la prescripción. Por ejemplo, una persona realiza formalmente el requerimiento de mediación prejudicial obligatoria, resultando así la suspensión del plazo de prescripción que venía corriendo. A su vez, esa misma persona pudo haber iniciado con anterioridad una petición judicial con la misma pretensión que interrumpió la prescripción. Del mismo modo, la petición judicial la pudo haber realizado en forma conjunta, en cuyo caso operará la interrupción de la prescripción y no ya la suspensión. O bien, finalmente y en este mismo ejemplo, también puede ocurrir que esta misma persona haya iniciado la mediación y posteriormente, pero antes de que esta finalice, haya interrumpido la prescripción por medio de una petición judicial con el mismo objeto. Es lógico en este último supuesto que la prescripción se verá suspendida ante el pedido de mediación, y luego interrumpida ante la petición judicial en los términos del art. 2546 del CCivCom que prescribe lo siguiente:

«Interrupción por petición judicial: El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable».

También, el Código Civil y Comercial se encarga de aclarar lo siguiente: «La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia» (art. 2547 «in fine»).

Por lo tanto, y como habíamos adelantado arriba, el cambio substancial ante la sanción del nuevo CCivCom, estriba en que el pedido de mediación ya no interrumpe más la prescripción en la provincia de Santa Fe (ni en ninguna otra), sino que la suspende en el modo y tiempo indicado en el citado art. 2542 del CCivCom.

Seguidamente, observaremos algunas precisiones que continúan siendo necesarias luego de las modificaciones comentadas «ut supra».

II. COMIENZO Y FIN DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Cabe preguntarse ahora, desde cuándo comienza y cuándo termina la suspensión de la prescripción ante el pedido de mediación en nuestra provincia. Esta pregunta nace dado que el art. 2542 del CCivCom establece lo siguiente: «El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero». En tanto que el art. 23 del Decr. reglamentario del art. 23 de la Ley 13.151, como vimos- sigue estableciendo que el

requerimiento de mediación debe ser entendido en los términos del art. 7 de la Ley 13.151 (ver comentario del mismo en esta obra). Por lo tanto, ¿es posible entender por analogía que la suspensión de la prescripción opera desde el «requerimiento» de mediación, o bien, desde «la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero»?

Si bien la duda no parece sencilla de dilucidar ante la fuerza del pedido de mediación que, por otro lado, es el título puesto al art.2542 («Suspensión por pedido de mediación»), lo cierto es que la letra de la ley optó por comenzar el curso de la suspensión desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. Es decir, desde la fecha en que se envía la comunicación fehaciente o desde que las partes se reúnen formalmente para celebrar la mediación, lo que ocurra primero.

Por su parte, no existen dudas respecto al término de la suspensión de la prescripción, por cuanto la norma es clara al establecer que ella finaliza «a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes». Esto es, el plazo de prescripción se suspende por el plazo que corra entre la notificación de mediación y hasta veinte días después del acto formal de entrega del acta de cierre de la mediación (2).

Finalmente, en lo que a este punto respecta, vale decir que ningún plazo de prescripción (ni suspensión ni interrupción) puede ser modificado por una ley provincial, dado que el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional, optó por entregarle la competencia referente a materia de fondo (como sin dudas es el instituto de la prescripción) a la Nación, o más precisamente, al Poder Legislativo nacional. De modo que nunca podrá modificarse un plazo de prescripción (sea de suspensión o de interrupción) por una ley o decreto provincial.

III. IMPEDIMENTO DEL SISTEMA

El art. 7, apartado III del Decreto reglamentario de la Ley 13.151 continúa señalando lo siguiente:«En caso de vencimiento de algún plazo e impedimento técnico en el sistema informático, el requirente podrá presentar físicamente el formulario de requerimiento de mediación en la Oficina de Gestión».

En este punto, la reglamentación alude al «vencimiento de algún plazo», como podría ser una obligación pronta a prescribir, y «al impedimento técnico en el sistema informático», como es la caída del sistema. Es decir, si ocurren ambos hechos, el letrado tendrá el derecho a presentar el formulario de requerimiento de Mediación, directamente en la Oficina de Gestión. Formulario que incluso, de no encontrarse a disposición, entendemos, podrá realizar en forma escrita ante la misma, con constancia de recepción (supliendo el formulario que no se encuentre a disposición por medio de un escrito similar al mismo conforme al punto III de la reglamentación que más adelante transcribimos). De suerte que ni el requirente, ni el letrado, podrán excusarse ante el vencimiento de un plazo y el impedimento técnico (por ejemplo de una obligación por prescribir), ya que la norma permite realizar la presentación, en dicho caso, directamente ante la nombrada Oficina.

En aquellos casos en que por razón de la feria judicial la Oficina de Gestión se encontrare cerrada al público, se podrá dar fecha cierta al formulario de requerimiento de mediación ante escribano público o funcionario judicial y, así intervenido, presentarlo físicamente en aquella el

primer día hábil de atención.

En esta misma línea, cuando por razón de la feria judicial -dice la norma, o agregamos nosotros-, cuando por tratarse de un día no hábil judicial, o cuando por cualquier otra razón, (en nuestro entendimiento de que la enumeración no es taxativa y lo que creemos ha querido expresar, es en esencia, la no disponibilidad de la Oficina de Gestión), la susodicha oficina se encontrare cerrada. Podrá darse fecha cierta al formulario de requerimiento de mediación, por medio de un escribano público o funcionario judicial. Para fijar dicha fecha cierta, y luego sí, presentarla el primer día hábil de atención, en que se encuentre abierta la Oficina de Gestión.

En el punto III, se detallan los requisitos que debe contener el formulario.

«1. Datos del requirente: nombre y tipo y número de documento en el caso de personas físicas; denominación y datos constitutivos en el caso de personas jurídicas de quien fuera requirente; el domicilio real del requirente y el que constituya en el radio urbano de la ciudad o pueblo que sea asiento de la Oficina de Gestión en la que se presenta el requerimiento de mediación».

»2. Datos del profesional patrocinante: nombre, tipo y número de documento, domicilio, dirección de correo electrónico y teléfono».

»3. Datos del requerido: nombre en el caso de personas físicas; denominación y datos constitutivos en el caso de personas jurídicas, domicilio; dirección de correo electrónico y teléfono, si se conocieren».

Estos datos, contemplados en la primera parte de la norma, son necesarios a los fines de hacer efectiva la citación a mediación. Por lo que, si el requirente no los ostenta, podrá:

- 1. O bien descartar la Mediación por ser una de las excepciones que contempla la norma conforme al inciso IV de esta reglamentación, que más adelante transcribimos.
- 2. O bien arbitrar los mecanismos de investigación necesarios para lograrlo, ya sean extrajudiciales o judiciales (ejemplos de estas últimas: medidas preparatorias, prueba anticipada o aseguramiento de pruebas, etcétera).

Los expresados en la segunda parte de la norma (dirección de correo electrónico y teléfono), no son obligatorios, pero deben incorporarse de ser conocidos para facilitar el procedimiento.

Sobre lo referido al requerido y / o requeridos, volveremos en el art. 23, 2.º párrafo, 2.a parte de la ley en comentario, al cual nos remitimos.

En este punto 4, se afirma lo siguiente: «Objeto preciso del requerimiento de mediación y su apreciación pecuniaria, en su caso. Si no fuere posible fijarla con exactitud, se suministrarán los antecedentes que puedan contribuir a su determinación aproximada».

El inciso requiere que se precise la pretensión por la cual se reclama, debiendo -el requirente- indicar sucintamente, cuál o cuáles son sus pretensiones u objetos (por ejemplo, el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer).

A la vez que, siguiendo a las normas rituales en la materia; v. gr., el art. 130, inc. 3, del Código

Procesal Civ. y Com. de Santa Fe (3), se solicita que se individualice el monto pecuniario o que se suministren los antecedentes que permitan contribuir a su determinación aproximada.

«5. En su caso, información acerca de la existencia de un pacto de prórroga de la competencia, lugar de cumplimiento de las obligaciones que se reclaman o lugar en que se realizó el hecho, acto o contrato que las origina».

Atento a tratarse de una ley provincial, cuya obligatoriedad no puede exceder los límites de la propia provincia, la reglamentación, requiere que se suministren y expliciten los datos que permitan acoger la causa en la provincia, a fin de que la Oficina de Mediación, decida conforme al punto V de la reglamentación que más abajo se trata.

«IV. En aquellos casos en que no se conociere el domicilio de ningún requerido, no será de aplicación el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria previsto en la Ley N.º 13.151, sin perjuicio de lo que el juez pudiere disponer si alguno de los requeridos compareciera, de acuerdo a lo previsto en los artículos 38 y 39 de la referida Ley».

La norma permite prescindir de la mediación, precisamente por no ser posible citar a los requeridos a la misma, en el caso de que no se conociera el domicilio de ningún requerido. Con la salvedad de la posibilidad de que tanto las partes de común acuerdo con el juez, dadas las circunstancias de la norma, puedan luego recurrir a "una instancia de la Mediación obligatoria" (4).

«V. La Oficina de Gestión determinará la sede de la mediación, sin lugar a recurso alguno, conforme a las siguientes pautas»:

»a. Si se invoca acuerdo de prórroga de la competencia judicial dentro de la Provincia, en la sede del lugar pactado o en la más cercana».

»b. De no existir acuerdo, en la sede del domicilio en la Provincia del requirente o en la más cercana, a menos que este opte por la sede del domicilio en la provincia del requerido».

»c. Si el requirente no tiene domicilio en la Provincia, en la sede del domicilio en la Provincia del requerido o en la más cercana».

»d. Si ninguno de los dos tiene domicilio en la Provincia, en la sede del lugar en que deben cumplirse las obligaciones que se reclaman o, en su defecto en la del lugar en que se realizó el hecho, acto o contrato que las origina, o en la más cercana a todas ellas»

»e. Si fueren varios los requeridos, en cualesquiera de las sedes anteriores a opción del requirente, y las eventuales opciones que ejerza el requirente».

»De común acuerdo, las partes podrán elegir la sede de la mediación».

El inciso otorga competencia a la Oficina de Mediación, para decidir, sin recurso alguno, la sede de la Mediación por realizarse, sobre la base de las pautas que en cinco incisos fija. No obstante, cabe efectuar las siguientes acotaciones.

En primer lugar, que siendo dicha oficina dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, la decisión que ella tome ostenta la naturaleza jurídica de un acto

administrativo. Por ello, le son aplicables todas las normas y doctrina judicial y autoral existente en torno al acto administrativo.

En segundo lugar, no puede exceder dicha decisión su ámbito de competencia provincial y, menos aún, oponerse a una norma de mayor jerarquía constitucional, como podría ser una ley nacional o la propia Constitución Nacional.

Todo ello, sin perjuicio de que posteriormente, en caso de no lograrse un acuerdo en la mediación, se plantee algún desacuerdo al respecto o conflicto de competencia judicial.

Por último, en lo que a este punto toca, creemos que la «Oficina de Mediación», en sus decisiones, no podrá ser extremadamente rigurosa o formalista en la apreciación de este punto, al momento de recibir el requerimiento. Y ello por, al menos, las siguientes razones: a. Siendo sus decisiones actos administrativos, se rigen por el derecho administrativo, y uno de los principios básicos de esta rama es la informalidad. b. Adherirse a un rigor formal de procedimiento, iría en contra de los mismos fundamentos y finalidades por las cuales se insta la Ley de Mediación y todas sus normas concordantes.

«VI. Si el requirente no satisface los requisitos formales, la Oficina de Gestión ordenará el cumplimiento para dar curso a su pedido, en el término de tres -3- días, bajo apercibimiento de tener por no presentado el requerimiento de mediación».

Los requisitos arriba enunciados, de no ser completados por el requirente, la Oficina de Gestión intimará a que sean subsanados en el plazo establecido, a fin de proseguir el trámite. No siendo subsanados en dicho plazo, se tiene por no efectuado el requerimiento (figurando en el sistema informático como «caducada» la Mediación). Caso en el cual, se podrá solicitar nuevamente la mediación, siempre y cuando no haya prescripto ya la acción.

«VII. Cumplidos todos los requisitos, la Oficina de Gestión sorteará el mediador de la sede correspondiente, notificará dicha designación al requirente y comunicará al mediador, dentro de los dos -2- días».

»El mediador sorteado, salvo las excepciones previstas en esta reglamentación, no será reintegrado a la lista de sorteo hasta tanto no hayan sido designados la totalidad de los mediadores que la integran».

c. Efectos de la suspensión de la prescripción respecto de los demás requeridos. Regla y excepciones ante el Código Civil y Comercial

- El párr. 2.º, en la I Parte del art. 23 de la Ley 13.151 afirma lo siguiente:

«La interrupción de la prescripción operará contra todos los requeridos.».

A partir de las modificaciones que se impusieron a partir del nuevo Código Civil y Comercial, el presente artículo sufre dos modificaciones. La primera es que debe entenderse como «suspensión de la prescripción», es decir ya no se debe leer como «interrupción», sino como «suspensión» de la prescripción. Y la segunda y más importante es que pierde casi la totalidad de su vigencia, con una sola excepción, ya que el art. 2540 del CCivCom sostiene ahora lo siguiente:

«La suspensión de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles».

Entonces, ¿cómo debe interpretarse de ahora en más la norma? De la siguiente manera:

La «suspensión» de la prescripción opera individualmente y, solo contra todos los requeridos, cuando se trate de obligaciones solidarias o indivisibles entre sí (o sea entre los requeridos solidarios y / o indivisibles).

Se aclara que también opera individualmente la suspensión de la prescripción en obligaciones concurrentes (conf. art. 851, inc.e, del CCivCom), es decir, no propaga sus efectos, sino solo individualmente entre cada obligado concurrente.

Con estas breves líneas entonces intentamos esquematizar algunos cambios que se produjeron a partir del nuevo Código Civil y Comercial y su influencia en la Ley de Mediación prejudicial santafesina 13.151.

(1) MÁRQUEZ, José F., y CALDERÓN, Maximiliano R.: «Prescripción y caducidad en el Código Civil y Comercial», en La Ley, 13/5/2015, 1. La Ley 2015, C, p. 743, cita online: AR/DOC/1454/2015.

(2) MÁRQUEZ, José F., y CALDERÓN, Maximiliano R.: op. cit.

(3) El art. 130 del CPCCSF -en su parte pertinente- dice lo siguiente: «La demanda será deducida por escrito y expresará:». Y en el inc. 3, dice: «La designación precisa de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria. Cuando no fuere posible fijarla con exactitud, se suministrarán los antecedentes que puedan contribuir a su determinación aproximada».

(4) Conf. arts. 38 y 39 de la Ley 13.151.

(*) Datos autor.

. 23.18 h